

TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

Título:	Plantilla correctora provisional del segundo ejercicio y publicación de la segunda prueba práctica del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración General
Origen:	Servicio de Personal
Categoría:	Empleo público
Descripción:	Bases específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión como personal funcionario de carrera de una plaza de administrativo de administración general del Ayuntamiento de Daimiel

ANUNCIO

El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración General hace pública la plantilla correctora provisional de la primera prueba práctica del segundo ejercicio, celebrado el día 23 de junio de 2026.

Así mismo se hace pública la segunda prueba práctica que queda expuesta en el Tablón Edictal y en la sede electrónica municipal.

Las personas interesadas podrán formular alegaciones en el plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En Daimiel, a fecha de firma electrónica.



PRIMERA PRUEBA PRACTICA

(Máximo 10 puntos)

Consistirá en resolver un supuesto práctico con diez preguntas tipo test, mas dos preguntas para posibles impugnaciones. Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Los/as aspirantes marcarán las contestaciones correspondientes en las hojas de examen. Cada respuesta correcta se puntuará con 1 punto, cada respuesta errónea restará 0,33 puntos. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se valorarán.

SUPUESTO PRACTICO

Doña T.A.M., vecina de una localidad de Castilla-La Mancha, presenta reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su municipio. Expone que contrató a través de una plataforma de viajes en línea una reserva turística para varias personas, compuesta por vuelo, alojamiento hotelero y alquiler de vehículo, con destino a Tenerife. La reserva fue formalizada electrónicamente y el precio total abonado ascendió, según la documentación aportada por la empresa en fase posterior, a 1.715,00 euros.

Durante la contratación se incorporó una cobertura denominada "Global Cancellation Coverage", cuyo importe fue de 134,77 euros. La reclamante manifiesta que no entendió correctamente el coste real de dicha cobertura y que, en su opinión, se le informó de manera confusa, pues el precio aparecía asociado a persona y trayecto.

Antes del inicio del viaje, el padre de la reclamante fue ingresado hospitalariamente, circunstancia que la reclamante acredita mediante justificante médico. Como consecuencia de ello, solicita la cancelación de la reserva y el reembolso íntegro de las cantidades abonadas.

La reclamación se dirige inicialmente contra Bravoventure Spain, S.L.U., entidad vinculada al sitio web de Lastminute.com. Dicha sociedad contesta alegando que no es parte contractual, que no ha prestado el servicio y que no ha recibido cantidad alguna de la reclamante, solicitando el archivo frente a ella.

Posteriormente se identifica como entidad interviniente a Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U., vinculada a Rumbo/Lastminute, que aporta documentación acreditativa de varios reembolsos efectuados a la reclamante: 134,77 euros, 359,60 euros y 1.220,63 euros, hasta alcanzar un total de 1.715,00 euros.

La OMIC ha dado traslado de la reclamación a las empresas afectadas, ha solicitado documentación, ha intentado una solución amistosa y debe decidir qué actuación administrativa procede.



PREGUNTAS TIPO TEST

1. **¿Cuál es la actuación más correcta de la OMIC al recibir la reclamación?**
 - a) Rechazarla porque la empresa reclamada tiene domicilio social fuera del municipio.
 - b) **Admitirla, informar a la persona consumidora, tramitarla y, en su caso, intentar una mediación.**
 - c) Resolver obligatoriamente imponiendo a la empresa la devolución reclamada.
 - d) Remitirla directamente al juzgado sin realizar ninguna actuación.
2. **En este supuesto, la contratación de vuelo, hotel y alquiler de coche en una misma operación debe analizarse principalmente como:**
 - a) Una compraventa ordinaria de bienes muebles.
 - b) Un contrato de transporte aéreo exclusivamente.
 - c) **Un posible viaje combinado, al integrar varios servicios de viaje.**
 - d) Un contrato bancario de financiación al consumo.
3. **Si una sociedad vinculada a la web contesta que no es parte contractual ni ha cobrado cantidad alguna, la OMIC debe:**
 - a) Archivar automáticamente toda la reclamación.
 - b) Ignorar la alegación y exigirle siempre el pago.
 - c) **Comprobar la documentación e identificar a la empresa organizadora, minorista o contratante efectiva.**
 - d) Sancionar directamente a la sociedad por falta de colaboración.
4. **Sobre los costes adicionales en un viaje combinado, la afirmación más correcta es:**
 - a) Siempre pueden cargarse después de contratar, aunque no se hayan informado previamente.
 - b) **Deben informarse antes de la contratación de forma clara, comprensible y destacada.**
 - c) Solo deben informarse si la persona consumidora los reclama.
 - d) No forman parte de la información precontractual.
5. **Si la cobertura de cancelación aparecía con un precio “por persona y trayecto”, lo jurídicamente relevante será:**
 - a) **Que la empresa pueda acreditar que la información fue previa, clara y aceptada expresamente.**
 - b) Que la consumidora no leyera las condiciones generales.
 - c) Que la cobertura tenga nombre comercial en inglés.
 - d) Que el importe sea inferior a 150 euros.
6. **En materia de viajes combinados, el viajero puede resolver el contrato antes del inicio del viaje:**
 - a) Nunca.
 - b) Solo si la empresa lo autoriza voluntariamente.
 - c) **Sí, aunque la empresa puede exigir una penalización adecuada y justificable, salvo supuestos legales de resolución sin penalización.**
 - d) Solo dentro de los 14 días posteriores a la contratación, en todos los casos.
7. **El ingreso hospitalario del padre de la reclamante:**
 - a) Es siempre, automáticamente, una circunstancia inevitable y extraordinaria del artículo 160.2 TRLGDCU.
 - b) **Puede ser relevante contractualmente o para una cobertura de cancelación, pero no equivale automáticamente a una circunstancia extraordinaria en destino o transporte.**
 - c) No tiene ninguna relevancia jurídica en ningún caso.
 - d) Obliga siempre a la empresa a pagar además daños morales.



8. Si la empresa acredita reembolsos por 134,77 €, 359,60 € y 1.220,63 €, la suma total es:
- a) 1.580,23 €.
 - b) 1.560,23 €.
 - c) 1.715,00 €.
 - d) 1.849,77 €.
9. Si la reclamante recibe la totalidad de lo abonado y no mantiene discrepancia fundada, lo más procedente para la OMIC es:
- a) Continuar indefinidamente el expediente.
 - b) Finalizarlo por satisfacción de la pretensión o solución amistosa, dejando constancia documental.
 - c) Imponer una multa automática.
 - d) Declarar la nulidad judicial del contrato.
10. La devolución íntegra de las cantidades reclamadas:
- a) Impide siempre cualquier actuación sancionadora.
 - b) Obliga siempre a sancionar.
 - c) No impide por sí sola valorar posibles indicios de infracción, pero tampoco justifica sancionar sin base suficiente.
 - d) Convierte la reclamación en una cuestión penal.

PREGUNTAS DE RESERVA.

1. En un contrato de viaje combinado contratado a través de una plataforma en línea, si la empresa reclamada alega que no es la prestadora directa del vuelo, hotel o vehículo, la respuesta jurídicamente más correcta es:

- a) La plataforma queda siempre exonerada porque solo actúa como intermediaria tecnológica.
- b) La persona consumidora debe reclamar separadamente contra la aerolínea, el hotel y la empresa de alquiler de vehículos, sin que pueda dirigirse contra la empresa que comercializó el paquete.
- c) Debe analizarse si la empresa actuó como organizadora, minorista o intermediaria responsable de la venta del viaje combinado, pues la responsabilidad frente al viajero no desaparece por el mero hecho de que los servicios los ejecuten terceros proveedores.
- d) La OMIC debe archivar la reclamación si la empresa no tiene establecimiento físico en el municipio.

2. Si durante la tramitación de la reclamación la empresa acredita documentalmente el reembolso íntegro del precio abonado por la persona consumidora, la actuación más ajustada de la OMIC será:

- a) Archivar sin más trámite, sin comunicar la respuesta empresarial a la reclamante.
- b) Dar traslado a la reclamante de la respuesta y justificantes de devolución y, si no existe oposición fundada, finalizar el expediente por satisfacción de la pretensión o solución amistosa.
- c) Continuar obligatoriamente la mediación hasta que la empresa reconozca expresamente su responsabilidad jurídica.
- d) Iniciar siempre expediente sancionador, porque todo reembolso implica reconocimiento de infracción administrativa.



SEGUNDA PRUEBA PRACTICA (máximo 20 puntos)

Consistirá en resolver diez preguntas de desarrollo de respuesta breve. Cada respuesta correcta se puntuará con un máximo de 2 puntos.

INSTRUCCIONES.

Los/as aspirantes deberán ceñirse al espacio reservado para la respuesta de cada pregunta; penalizándose la contestación fuera de dicho espacio.

Evite tachaduras, abreviaturas, textos completos en mayúsculas, así como cualquier tipo de caligrafía que permita identificar al aspirante.

El ejercicio deberá realizarse con el bolígrafo facilitado por el Tribunal.

Finalizada la realización de este segundo ejercicio, se sumarán las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos pruebas prácticas, pudiendo alcanzarse una puntuación máxima de 30 puntos, quedando eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen los 15 puntos.

1ª Pregunta.

Don Javier es funcionario de carrera de un Ayuntamiento. Aprovechando su puesto, tramita de manera irregular una licencia urbanística a favor de un familiar, omitiendo trámites obligatorios y dictando una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad. Como consecuencia de esta actuación, un vecino resulta perjudicado económicamente y reclama una indemnización por los daños sufridos.

Además, durante la investigación de los hechos se constata que Javier ha incumplido gravemente sus deberes profesionales y ha vulnerado los principios de objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación de los empleados públicos.

Analice de forma breve las posibles responsabilidades en que ha podido incurrir el funcionario, diferenciando entre responsabilidad disciplinaria, penal y civil.

2ª Pregunta.

La Consejería de Cultura concede a una asociación una subvención de 20.000 euros para la realización de un proyecto cultural. El pago queda condicionado a la correcta justificación de la actividad antes del 31 de marzo del año siguiente.

La entidad beneficiaria no presenta ninguna documentación justificativa dentro del plazo establecido. Posteriormente, se comprueba que parte de los fondos se destinaron a gastos ajenos al proyecto subvencionado.

Determine de forma breve y concisa las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de justificación de la subvención, (en relación con el reintegro, la pérdida del derecho al cobro y las posibles infracciones y sanciones administrativas).

3ª Pregunta

El Ayuntamiento de "San Lorenzo de la Sierra" se encuentra en una situación administrativa compleja debido a tres incidentes que afectan a su patrimonio:

Una empresa proveedora a la que el Ayuntamiento adeuda una cantidad considerable ha solicitado judicialmente el embargo de la Casa Consistorial (donde se ubican las oficinas municipales) y de un monte comunal del que los vecinos obtienen tradicionalmente pastos y leña



Un particular ha vallado una parte de una plaza pública colindante a su vivienda. Ante el requerimiento de retirada, el vecino presenta un escrito alegando que, dado que su familia ha ocupado y cuidado ese espacio de forma ininterrumpida durante más de 40 años, ha adquirido la propiedad por el paso del tiempo (prescripción adquisitiva)

Un grupo inversor ha ofrecido al Alcalde una importante suma de dinero por la compra de una parte del parque público municipal para construir un complejo deportivo privado. El Alcalde considera que la venta es necesaria para obtener liquidez y pagar las deudas municipales

La Diputación Provincial ha enviado al Ayuntamiento una liquidación de tasas e impuestos por la titularidad de los cementerios municipales y las plazas del pueblo.

¿Cuáles son las características que la normativa reguladora de los bienes de las entidades locales atribuye a los bienes comunales y demás bienes de dominio público?

4ª Pregunta

Un grupo de vecinos del municipio de "Valle Silencioso" ha presentado múltiples quejas ante la Consejería de Sanidad debido al cierre prolongado de las urgencias locales, alegando que se está vulnerando su derecho a la protección de la salud (recogido en el Título I de la Constitución). Tras meses de silencio administrativo y habiendo agotado las reclamaciones internas sin éxito, los vecinos deciden elevar su situación a una institución nacional.

Buscan a un alto comisionado designado por las Cortes Generales cuya función específica sea la defensa de los derechos comprendidos en el Título I y que tenga la potestad legal de supervisar la actividad de la Administración pública para informar posteriormente al Parlamento sobre estas irregularidades.

¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 regula la creación de esta institución encargada de supervisar a la Administración y defender los derechos fundamentales, y cómo define su relación con las Cortes Generales?

5ª Pregunta.

Una empresa de productos ortopédicos lanza al mercado un nuevo dispositivo de asistencia para la movilidad. El etiquetado de la caja contiene las advertencias de seguridad en un tamaño de fuente casi ilegible y la presentación de las instrucciones esenciales de uso se realiza únicamente mediante un diagrama técnico complejo sin texto explicativo. Un cliente con discapacidad visual y avanzada edad reclama que no puede comprender cómo usar el aparato de forma segura ni acceder a la información básica del producto.

¿Qué precepto del Real Decreto Legislativo 1/2007 obliga a las empresas a que el etiquetado y presentación de sus bienes sean de fácil acceso y comprensión, exigiendo además una especial atención a las personas consumidoras vulnerables?

6ª Pregunta

Don Roberto presta servicios como personal laboral en la empresa pública "Gestión de Aguas S.A.", una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece en un 65 por 100 a una Comunidad Autónoma. Don Roberto desea iniciar una actividad como autónomo por las tardes y sostiene que no necesita solicitar la compatibilidad, alegando que la Ley 53/1984 solo afecta a los "funcionarios" que trabajan directamente en las Consejerías o Ministerios y no a trabajadores de empresas con forma de sociedad mercantil.



Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ¿es correcta la interpretación de Don Roberto? Señale el precepto legal que determina si este trabajador está sujeto o no al régimen de incompatibilidades.

7ª Pregunta

El Ayuntamiento de "Valleverde" publica una convocatoria para la contratación, bajo la modalidad de personal laboral temporal, de un técnico para la delegación de RRHH. Para cubrir esta plaza, se propone la utilización de un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Se presenta como candidato don Juan Pérez, quien aporta el título de Técnico en Gestión Administrativa (obtenido hace 2 años) y que ya trabajó previamente durante 7 meses en una empresa privada con un contrato de la misma naturaleza y para la misma titulación.

A la luz del artículo 11.3, letra b), del ET, ¿cuál es la duración mínima y máxima permitida para este contrato, salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa?

8ª Pregunta.

Siguiendo con el enunciado anterior según el artículo 11.3, letra c), del ET y considerando los antecedentes del candidato, ¿podría el Ayuntamiento contratar a don Juan Pérez por una duración de un año? Justifique la respuesta atendiendo a los límites de contratación por una misma titulación.

9ª Pregunta.

El Jefe del Negociado de Tributos del Ayuntamiento de Daimiel dicta y firma una resolución administrativa por la cual se impone una sanción de tráfico a un ciudadano. La normativa vigente establece que dicha competencia sancionadora corresponde exclusivamente al Alcalde o al Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.

¿cuál es la calificación jurídica de este acto administrativo?

10ª Pregunta.

El Ayuntamiento de "Cinco Casas" tiene la necesidad puntual de contratar la reparación de las humedades en la fachada de la Casa Consistorial debido a la temporada de lluvias de este invierno. El presupuesto de ejecución material asciende a 18.500 euros (IVA excluido).

Teniendo en cuenta la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿puede tramitarse como un contrato menor y qué documentación mínima debe figurar en el expediente?

